

CONVERSACIONES DE PAZ ENTRE GOBIERNO Y GUERRILLA EN COLOMBIA

LEGITIMIDAD, JUSTICIA Y ACTORES INTERNACIONALES



Ingrid Ostendorf
Tesina de Bachelor

Estudios Latinoamericanos
Universidad de Leiden
Junio de 2014

Profesor guía:
Prof. Dr. P. Silva

Índice

Introducción.....	3
Capítulo 1	
El marco del proceso de las conversaciones de paz: los conceptos de legitimidad, justicia y actores internacionales	
1.1 La legitimidad del liderazgo dentro de un estado de desmilitarización	5
1.2 El tema de la justicia durante las conversaciones de paz - democratización	7
1.3 El rol de los actores internacionales en las negociaciones de paz	10
Capítulo 2	
Las relaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC: una perspectiva histórica	
2.1 La violencia y el surgimiento de la guerrillera en Colombia	12
2.2 La búsqueda de la paz en Colombia: la estrategia presidencial	13
2.3 Influencias internacionales.....	16
2.4 Uribe y la ‘mano dura’	17
Capítulo 3	
El presidente Santos y las conversaciones de paz en Colombia	
3.1 La legitimidad de la persona de Santos como representante de Colombia.....	20
3.2 La presencia de la justicia en la presidencia de Santos.....	22
3.3 El rol de los actores internacionales en la diplomacia por la paz de Santos	22
3.4 Las opiniones sobre la continuación de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.....	23
Conclusión	27
Bibliografía	29

Introducción

Las operaciones internacionales para llegar a un acuerdo de paz intentan restablecer a los países que han sufrido guerras civiles. Organizaciones dedicadas a mantener la paz han promulgado una visión particular de cómo los Estados deben organizarse internamente, con base en los principios de la democracia liberal y la economía de mercado (Boyle, 1996). En el caso de las fuerzas guerrilleras se nota que dentro de un país existen diferentes actores y todos tienen sus propios intereses. Las conversaciones de paz son un proceso muy complicado dado todos los intereses que hay que tener en cuenta, lo que ha contribuido en que aún subsistan las fuerzas guerrilleras dentro del país. La violencia armada es una problemática en diversas áreas de América Latina, la que se intentan solucionar por medio de las conversaciones de paz. En esta tesis se analiza el proceso de las negociaciones de paz y específicamente el caso entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las FARC se establecieron oficialmente en 1966 durante la segunda conferencia del grupo guerrillero del sur de Colombia. Sus documentos fundacionales declaraban que la situación política en Colombia se había deteriorado por la ‘falsa’ democracia y por la distribución polarizada de la riqueza (Rochlin, 2003). Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia es el grupo guerrillero dominante en el país con aproximadamente 17.000 miembros (Petras, 2000). Surgen entre las décadas de 1920 y 1930, a principios del conflicto agrario de los trabajadores pobres contra los grandes latifundios (Pizarro, 1992). Desde un principio crecieron como un movimiento localizado, apoyado por los campesinos, hasta llegar a convertirse en un movimiento revolucionario a nivel nacional. Este grupo guerrillero estuvo inspirado por la Revolución Cubana. Critican el Estado por la corrupción, su indiferencia sobre la desigualdad de la sociedad colombiana, sus relaciones con grupos que aterrorizan a la población y su fracaso para enjuiciar a los que atentaron contra los derechos humanos. Además, critican que el Gobierno sea débil frente a los deseos e intereses de los Estados Unidos, mostrando poca independencia de este (Lee, 2012).

Las FARC vienen luchando desde hace muchos años para cumplir sus metas. Aquí es evidente que no se ha logrado llegar a un acuerdo durante las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Este caso en específico evidencia que en la historia de Colombia se ha experimentado mucha violencia y que aún es posible notar una situación violenta causada por diferentes partidos cuando se intenta salvar el problema de la oposición de las FARC. Este antecedente juega un papel importante para explicar cómo es posible que después de tantos años en el caso de Colombia no se logre concretar un acuerdo de paz, a diferencia de otros casos en América Latina. Puede ser que, después de tantos años el gobierno de Colombia no puede poner sus manos en las estrategias de las FARC, ya que es una comunidad en la que existen muchos secretos. O posiblemente porque los Estados Unidos se han mezclado tanto que el proceso aún se ha vuelto más complejo. O es simplemente porque las FARC no quieren rendirse. Esa pregunta se analiza a lo largo de esta tesis, como también las posibilidades que existen para el Gobierno colombiano según diferentes observadores para poder poner fin a la violencia armada. Dado el alto costo de los conflictos entre diferentes partes, la comprensión de los factores que influyen en

la posibilidad de llegar a acuerdos negociados entre los partidos enfrentados ha sido de gran interés. Tal interés no es sólo académico: conflictos intergrupales persistentes a menudo y provocan fuertes llamadas de actores, como por ejemplo la comunidad internacional, para las dos partes al sentarse a la mesa y limar sus diferencias.

El objetivo en esta investigación es analizar los diversos intentos que han tenido lugar a partir de la década de 1980. El proceso de negociación de paz exige, según el debate académico, tres condiciones esenciales: los conceptos de legitimidad, justicia y actores internacionales. Este análisis hace referencia a estos tres conceptos de acuerdo a lo elaborado por diferentes autores, aclarando que se trata de entender cómo estos tres conceptos se presentan en otros casos y específicamente en el caso de las FARC. La pregunta principal que esta investigación trata de responder es la siguiente: ¿qué actores y factores resultan tener una función decisiva en el éxito o fracaso de las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC?

La tesis está dividida en tres partes. El primer capítulo es el marco teórico de la investigación, en el que se dan conocer los tres conceptos antes descritos (legitimidad, justicia y actores internacionales), los que son de importancia para la investigación y que guían el desarrollo de este estudio. Los conceptos se aclaran con unos ejemplos de conversaciones de paz con grupos guerrilleros en América Latina. El segundo capítulo, el contexto histórico, se centra en la historia en las negociaciones de paz de Colombia en el caso específico del tema las conversaciones de paz. Se analiza aquí el comienzo de la participación del grupo guerrillero en las conversaciones de paz, las diplomacias de paz de los presidentes durante las tres últimas décadas, el papel de la comunidad internacional en el caso de las negociaciones de paz en Colombia y la agenda política del expresidente Uribe. El tercer y último capítulo contiene el análisis del tema central de la investigación: la situación de las conversaciones de paz en Colombia durante la presidencia de Santos. En este último capítulo se muestra cómo los conceptos del primer capítulo están presentes en la agenda política de Santos y cuáles son las opiniones y anhelos de algunos académicos e interesados sobre la continuación de las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de Colombia. Es interesante ver qué escriben los autores académicos sobre este debate, para después, al fin del texto, hacer una conclusión en que se trata de responder a la pregunta principal.

Capítulo 1

El marco del proceso de las conversaciones de paz: los conceptos de legitimidad, justicia y actores internacionales

Los procesos de paz implican un esfuerzo para poner fin a la confrontación armada para llegar a acuerdos que aborden al menos algunos de los principales desequilibrios políticos, económicos, sociales y étnicos que llevaron al conflicto en primer lugar. En este capítulo se abordan los conceptos que según la discusión académica son de importancia para hacer posible las negociaciones de paz. Eso se hace para tener en marco qué importancia específica tienen estos conceptos en el proceso de llegar a un acuerdo de paz, para quizás poder asegurar el éxito de las conversaciones acerca de ella. Primero se analiza el concepto de la legitimidad en el caso específico del liderazgo, quién está presente en el poder y qué influencia puede tener el grado de su legitimidad durante las negociaciones de paz. Segundo, se analiza el concepto de la justicia. En este caso específico de las conversaciones de paz significa la justicia del proceso del diálogo, si por ejemplo la formulación de la agenda va en manera correcta. Y tercero, la función de los actores internacionales en las negociaciones de paz. Los tres conceptos se analizan a través de unos ejemplos de conversaciones de paz en América Latina en los países siguientes: Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

1.1 La legitimidad del liderazgo dentro de un estado de desmilitarización

Para empezar con las negociaciones ambas partes tienen que mostrar su voluntad de aceptar la realidad, una oferta para negociar. Varios factores limitan la confianza en la predicción de un efecto principal del poder de la voluntad para negociar. Los grupos con mayor poder aún pueden obtener beneficios de las negociaciones, incluso si éstos implican la posibilidad de renunciar a ciertas ventajas materiales. Además de eso, es la manera de cómo uno utiliza su poder para saber si es un aspecto positivo o negativo en el progreso de las conversaciones de paz, y si actúa de manera legítima o ilegítima. Hay muchos factores que pueden bloquear un proceso de paz, de ahí que autores como Bejarano subrayan la necesidad para que las negociaciones no se bloqueen. Hay que hacer estar presente la necesidad objetiva de la desmilitarización (Bejarano, citado por Arnson, 1999: 5).

Según Clements la legitimidad depende de si la relación contractual entre el Estado y los ciudadanos está funcionando de manera efectiva o no. Los ciudadanos individuales o miembros de las comunidades reconocen a los actores políticos, las instituciones y las relaciones a cambio de servicios que garanticen su bienestar individual y colectivo. Cuando tal bienestar no se produce, la legitimidad disminuye y los gobernantes a menudo se ven obligados a recurrir a la persuasión coercitiva para

conseguir la gobernabilidad. Las acciones bien intencionadas de los constructores de la paz internacionales no van a generar legitimidad sostenible si no se encarnan en valores, creencias, tradiciones y costumbres locales. Estos pueden coincidir con valores universales, los derechos internacionales, pero si no hay una voluntad de ir con la localidad, la probabilidad de desarrollar una paz sostenible es muy baja. Las partes interesadas en un proceso de paz pueden aumentar la legitimidad por tomarse el tiempo para identificar los valores habituales, las creencias y las prácticas, la creación de comunidades y roles de consolidación de la paz. Esto significa el reforzar la legitimidad y la eficacia de las instituciones del Estado (Clements, citado por Ramsbotham y Wennmann, 2014: 13).

También se explica en la literatura académica que la ausencia del desarrollo institucional previo y la multiplicidad de las tareas de la posguerra hacen transiciones de posguerra más frágil y difícil de consolidar. Negociaciones exitosas se pueden llevar adelante sólo cuando los líderes del gobierno, y los presidentes en particular, son vistos como legítimos por la población políticamente activa y los insurgentes. La legitimidad de los gobiernos, lo que depende del grado del apoyo ciudadano, es importante no sólo para superar la potencial resistencia al proceso de paz de los actores políticos claves como los militares o la élite terrateniente, sino también para los propios guerrilleros, que buscan un interlocutor con capacidad de cumplir con los acuerdos firmados en la mesa de negociaciones (Golbert, 2004). Según Palacio, la crisis de la legitimidad del sistema político es causada por escándalos financieros, la aparición de tráfico de drogas y el fortalecimiento de la guerrilla (Palacios, 2006: 171).

Mejorar el grado de la legitimidad del Estado se puede considerar como el aspecto capaz de causar que la situación en que se encuentran las conversaciones de paz se exacerbe y que el progreso de las negociaciones se empeore. En este caso, un aspecto fundamental para que la guerrilla negocie es que vea al gobierno como un interlocutor legítimo, de modo que desistan de responder con las armas. El fenómeno de la desmilitarización es lo que el gobierno debe implementar para que a su vez se promueva el proceso de paz. Así que la legitimidad de los negociadores de la guerrilla debe ser tal que puedan concitar la lealtad de los militares y lograr imponer compromisos difíciles a sus partidarios a nivel de las bases. La legitimidad de las fuerzas guerrilleras cara a cara al resto de la población debe ser suficiente para que en la mesa de negociaciones se logren acuerdos en términos generales, pero es menos esencial cuando lo que se acordó en la mesa de negociación satisface las demandas de amplios sectores de la sociedad (Arnson, 1999: 7). En el caso de Nicaragua se observa que la disposición del gobierno nacional de aceptar la legitimidad del gobierno Sandinista y de validar sus respuestas ha creado un mecanismo en donde el FSLN podría ser admitido en el diálogo internacional de paz. Su inclusión era un requisito previo para cualquier avance hacia la paz.

Una serie de acontecimientos en la década de 1990 sugirió que el proceso de paz en Nicaragua había avanzado sustancialmente. En primer lugar, el fin de la Guerra Fría desactivó el conflicto de Nicaragua mediante la eliminación de la asistencia externa a las partes en conflicto. Aunque las Naciones Unidas han seguido desempeñando un papel activo en la política nicaragüense, sobre todo en temas de litigios sobre la propiedad y los militares, por lo general, se ha aceptado la legitimidad de todos los actores clave en Nicaragua, incluyendo al FSLN. Esta postura ha contribuido a trasladar el conflicto en los canales políticos y promover la paz. En segundo lugar, las nuevas normas regionales que han desarrollado, se oponen a la violencia renovada. Las otras naciones ahora están trabajando conjuntamente en proyectos económicos, políticos y hasta militares. En tercer lugar, la gente en Nicaragua estaba cansada de la guerra. En

ambos lados del espectro, hay una fuerte conciencia de que la guerra, la revolución, y golpes del Estado ya no representan estrategias viables para el cambio social. En cuarto lugar, se han logrado importantes avances en la desmovilización de los combatientes. Las fuerzas opositoras cuentan ahora sólo unos pocos cientos, y algunos están vinculados sólo superficialmente a los antiguos contra-ejércitos. Sus miembros cada vez más son adolescentes sin experiencia militar, cuyas actividades son más criminales que políticas. Aunque Nicaragua ha avanzado hacia la paz en un curso inestable, hay una enorme diferencia entre el nivel del conflicto militar en 1990 con relación al de 1997.

El crecimiento de las redes de activistas por la paz están surgiendo, formando equipos para mediar en los conflictos y proponer alternativas y no simplemente para denunciar los abusos (Spalding, citado por Arnson, 1999: 31). Este nuevo énfasis en el activismo a nivel local ayuda a resolver los conflictos antes de que se conviertan en enfrentamientos violentos y para desacelerarlos cuando se haya convertido en estos últimos. Pero, al mismo tiempo, el proceso de paz se ha enfrentado a una serie de desafíos especiales en Nicaragua. La negociación de la paz, en este caso se define esencialmente, como un proceso de desmovilización, sin una cuidadosa discusión de las cuestiones que dividían a la sociedad. Los acuerdos de paz fueron redactados en una sola semana después de la derrota electoral de los sandinistas en 1990. Ninguna de las partes tuvo tiempo para prepararse para una nueva era o construir un diálogo serio. Ambos, sandinistas y sus contrapartes entraron en la negociación de paz con profundas sospechas acerca de sus adversarios y poco compromiso real para vivir lado a lado. Empujado rápidamente a conciliar, sin la oportunidad de expresar sus quejas, aclarar los abusos, los combatientes de ambos lados eran hostiles y un poco receptivos. Sin el apoyo de una misión internacional capaz de ayudar a todas las partes para definir una agenda significativa y apoyar su cumplimiento, Nicaragua se inclinó rápidamente a nuevo un tipo de guerra (Spalding, citado por Arnson, 1999: 31). Otro caso es la legitimidad del Estado durante las conversaciones de paz en Guatemala.

Según Arnault, las negociaciones de paz de Guatemala (1991-1996) ofrecen un buen ejemplo del desafío para hacer el Estado legítimo. A finales de 1980 y principios de 1990 la noción de esa solución pacífica frente a la hostilidad abierta del establecimiento económico y militar de gran alcance. Las élites guatemaltecas estaban convencidas de que solucionar la continuación del conflicto militar era una opción más segura que las negociaciones con la dirigencia de la guerrilla, lo que implicaría precisamente la legitimación de su lucha y de su agenda política. Bajo estas circunstancias, el proceso de paz no podría prosperar sino que se hizo atractiva para un amplio espectro de intereses, y se ha establecido en los ojos del público en general como una empresa legítima y viable. Y en gran medida, en un período de seis años, las negociaciones tuvieron éxito en esto, sobre todo valiéndose de tres fuentes clásicas de la legitimidad interna: representación, participación y rendimiento (Arnault, citado por Ramsbotham y Wennmann, 2014: 22).

1.2 El tema de la justicia durante las conversaciones de paz - democratización

La justicia es otro concepto interviniente, lo que se ha considerado según el debate académico como importante para hacer la situación más favorable para empezar con las negociaciones de paz. Bendaña discute la necesidad de los mecanismos que se aproximan a la perspectiva de la población con el fin de resolver los conflictos.

Particularmente en ausencia de estructuras preexistentes para la integración y la absorción de los excombatientes y sus familias. La continuación de la violencia y la pobreza, y la falta de justicia, sostiene, proporcionan un contrapeso importante a la consecución de la democracia procedimental (Bendaña, 1996). Hay una causal y de fortalecimiento mutuo entre los procesos de transición democrática y la paz: las negociaciones se hacen posibles por un proceso previo de apertura democrática, pero poco profundo, para que el proceso de paz favoreciera esa transición. Así que la guerra de guerrillas, en cuyo nombre los gobiernos tratan de justificar las prácticas antidemocráticas y la represión generalizada, pueden a su vez convertirse en fuerzas para la democratización. Esto es cierto cuando se inician aperturas democráticas a nivel estatal para dar una respuesta política a la insurgencia y al terminar la guerra ello proporciona oportunidad de renegociar los elementos disfuncionales del sistema político y económico. Elecciones y reformas constitucionales llevadas a cabo durante la guerra proporcionan un marco jurídico común y una infraestructura que permite que tanto la izquierda como la derecha pelear por aspectos institucionales más sustanciales de la democracia en la mesa de la paz (Arnault, 2006). Aquí está presente el concepto de la justicia. Ambas partes tienen que tener el derecho a la justicia.

En nombre de la lucha contra la guerrilla, los gobiernos de América Latina y otras partes han llevado a cabo la tortura y la desaparición, el asesinato y la masacre, borrando la distinción entre civiles y combatientes, con el pretexto de la búsqueda de la supervivencia del Estado. Mientras que la represión y el abuso de los derechos humanos puede haber precedido al conflicto armado y de muchas maneras contribuyeron a su estallido, no hay duda de que las guerras se perpetúan e intensifican el abuso, ya que toda la actividad de la oposición se subsume bajo la etiqueta de subversivo, y la distinción entre la guerrilla y los que podría simpatizar con ellos se observa en la brecha. Al mismo tiempo, los insurgentes mismos violan la ley estatal de un derecho internacional humanitario por asesinar a civiles, llevar a cabo ataques indiscriminados, secuestros y extorsión de actividades racionalizadas en el nombre de la construcción de un tesoro de guerra financiera, negando la autoridad del Estado en las áreas de los insurgentes consideren su zonas de influencia, o la simple eliminación de presuntos informantes o los que no comparten su agenda revolucionaria. Así que la paz se declara sobre las cenizas de muchas víctimas. La cuestión de qué hacer con los agresores, tanto en nombre de la justicia para las víctimas como la consolidación del imperio de la ley, se convierte en algo fundamental en la construcción del orden de la posguerra (Arnson, 1999: 10). El concepto de justicia es un tema muy complejo que se menciona durante las conversaciones de paz y lo que determina si por el grado de justicia ambas partes estén dispuestos a hacer las negociaciones de paz. Las víctimas consideran que los rebeldes que asesinaron a la gente deben ser juzgados. En este caso de las guerras civiles se ve muy a menudo que el gobierno militar también asesinó a gente inocente, que para lo cual en realidad también deben ser juzgados solo que en este caso del gobierno nacional es un tema más complicado. Temas que pueden molestar al progreso en el proceso de llegar a un acuerdo de paz. Uno de los ejemplos de América Latina donde el tema de la justicia está presente es el de Guatemala.

Guatemala, la situación en la cual se formalizaron grandes grupos guerrilleros entre los años setenta y ochenta en regiones ubicadas en las tierras altas guatemaltecas, estos grupos se iniciaron enraizándose entre los campesinos. Uno de estos grupos era la guerrilla izquierdista Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con la que se realizaron las conversaciones directas a partir de 1991. En 1994 las Naciones Unidas implementaron estos procesos para moderar las discusiones en torno a una agenda ambiciosa. En diciembre del año 1996 el gobierno del presidente electo Álvaro

Enrique Arzú Irigoyen firmó un acuerdo de paz definitivo (Holiday, 2000). Lo que muy a menudo no se menciona es que en el proceso de paz en Guatemala los dos partidos, el gobernante Partido de Avanzada Nacional (PAN) y la guerrilla de la URNG, eran actores relativamente débiles con un apoyo minoritario dentro de la sociedad. Irónicamente, la amplitud y el alcance de los acuerdos de paz, que incluyen aspectos socioeconómicos, derechos étnicos, las reformas electorales y constitucionales, el reasentamiento de los refugiados y la población desplazada, se derivan más de esta debilidad que de cualquier fortalezas inherentes. Los logros del gobierno del PAN desde la firma del acuerdo de paz no fueron insignificantes. La policía local se triplicó, los kilómetros de carreteras pavimentadas se incrementaron en 75 por ciento, el número de personas con acceso a la electricidad aumentaron en cerca de la mitad, y las inversiones en salud y educación se doblaron en un periodo de cuatro años, como lo hizo el número de líneas telefónicas. Al mismo tiempo, las cuestiones indígenas y en menor medida los problemas de las mujeres han encontrado un lugar en la agenda pública nacional, y la participación política de estos dos grupos ha aumentado (Holiday, 2000). Lo más importante, 2.000 combatientes rebeldes fueron desmovilizados pacíficamente, y no hubo asesinatos de exguerrilleros que se produjeran con la intención de descarrilar el proceso. Todo esto debe apuntar al gobierno PAN como probablemente el más eficaz entre los gobiernos guatemaltecos en la historia reciente. Una de las características del proyecto de paz del PAN era su limitada concepción del nivel de participación de las organizaciones civiles y partidos políticos. El proceso de paz de Guatemala en última instancia, podría ser considerado exitoso si contribuye a la reconciliación entre los muchos participantes en el conflicto armado. La historia del conflicto sigue siendo controvertida, más aun teniendo en cuenta la derrota de las guerrillas izquierdistas. Mientras que las normas y las instituciones internacionales de derechos humanos apoyan claramente el descubrimiento de la verdad sobre el pasado sangriento de Guatemala, estas investigaciones ponen en tela de juicio las estructuras fundamentales del poder militar, político y económico de Guatemala (Holiday, 2000).

En este ejemplo la presencia de la justicia está clara. Quizás porque las dos partes eran relativamente débiles que todo ha ido pacíficamente. No asesinaron a exguerrilleros y en lugar de hacer eso los desmovilizaron. En la agenda negociada también se mencionó la participación de las mujeres y de los indígenas. Un aspecto que se puede considerar como un elemento que determina el grado de la democracia real. La agenda ambiciosa que gracias a los procesos que las Naciones Unidas implementaron para moderar las discusiones sobre la agenda, el aspecto de justicia aquí se ha presentado de manera correcta, lo que ha promovido en este caso el proceso de las negociaciones de paz. Según Arnault, el precio a pagar para mantener abiertos los canales de procesamiento judicial en Guatemala es la precariedad de la situación jurídica de los combatientes. De hecho, si se observan estrictamente los términos de la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala, que excluye de la amnistía la tortura, las desapariciones forzadas, así como los abusos cometidos fuera de situaciones de combate, de modo que la persecución judicial generalizada podría ser una posibilidad muy real. Al final, la protección de facto se produce a través de una combinación de debilidades en el Poder Judicial, la resignación y la falta de confianza en el sistema de justicia por parte de las víctimas. No está claro si los intereses de la paz o la justicia han sido mostrados como resultado (Arnault, 2006).

1.3 El rol de los actores internacionales en las negociaciones de paz

La visión mundial realista que se ha equiparado el poder con la fuerza militar no tiene adecuadamente en cuenta el hecho de que los gobiernos también quieren otras cosas. Como la legitimidad internacional y la oportunidad de competir en la nueva economía globalizada, objetivos que no puedan lograrse y a menudo son bloqueados por supremacía militar (Touval y Zartman, 1985). Para eso es necesario que cumplan con las expectativas internacionales antes de que el extranjero acepte a los países de América Latina en el mercado internacional. Además de este aspecto, el rol de la comunidad internacional, a través de instituciones como las Naciones Unidas (ONU) y las Organizaciones de Estados Americanos, y también a través de las acciones de los distintos gobiernos, ha sido esencial para la conclusión de los acuerdos de paz. El papel de la ONU implicó tanto a la mediación como la verificación sobre el terreno de los acuerdos de paz. El principio central para la participación internacional ha sido, y lo será aún más en el futuro, el compromiso de ambas partes de un acuerdo negociado. La esperanza de que las Naciones Unidas u otra tercera parte se involucren en un proceso de paz con el fin de rescatar a una nación de la misma es cada vez más remoto en la era de las restricciones presupuestarias de la ONU y la reticencia de los gobiernos nacionales a participar en el conflicto en ausencia de una clara estrategia de salida. Un órgano como las Naciones Unidas pueden facilitar el acuerdo, y las habilidades de un mediador pueden jugar un papel definitivo. Los actores externos, sin embargo, no pueden sustituir la voluntad de las partes (Touval y Zartman, 1985). Ahora es importante para la investigación ver de qué manera en el proceso de las negociaciones de paz se involucran a los actores internacionales, y qué resultado tendría la presencia de ellos.

Las condiciones internas en las que se forjó la paz en cada país diferían dramáticamente. Uno de los ejemplos es la situación en El Salvador en donde la ONU no cumplió con las expectativas. Condiciones internacionales e internas dieron lugar a un acuerdo de paz. El gobierno del presidente Alfredo Cristiani y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron un acuerdo de paz en 1992, poniendo fin a un conflicto militar aparentemente insoluble en el contexto de una profunda reforma política e institucional. Las conversaciones de paz con la mediación de las Naciones Unidas, que representa la primera vez en la historia de la ONU que el organismo internacional se involucró en las negociaciones para poner fin a un conflicto interno. También, por primera vez, las Naciones Unidas desplegaron una misión de observadores para verificar la situación de los derechos humanos en El Salvador previa a un alto al fuego y luego se expandió la misión de supervisar la aplicación de todos los aspectos clave del acuerdo. El período de la evaluación del cumplimiento formal con el acuerdo terminó con la realización de elecciones nacionales en 1994. Pero la transformación de las instituciones democráticas prescrito en el acuerdo de paz se ha quedado corto en muchos aspectos importantes, lo que compromete la dirección política general del país (Arnson, 1999: 3). Eso es un ejemplo en donde el rol de los actores internacionales no tuvo mucho éxito en los resultados de la continuidad del proceso de paz. Seguramente que ha jugado un papel, en este caso la falta de experiencia de las Naciones Unidas, porque fue la primera vez que se involucran el órgano internacional en las negociaciones de paz en América Latina.

Según Boyce, la falta de coordinación entre la política económica y el proceso de paz ha causado que el acuerdo de paz no tuviera muchos resultados positivos. Sostiene que la estabilización macroeconómica no se traduce automáticamente en las

políticas para ayudar a construir la paz. La falta de coordinación entre las instituciones que formulan políticas económicas, especialmente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y las organizaciones humanitarias, es decir, la ONU, impidió cualquier discusión sobre los recortes presupuestarios y la liberalización del comercio, lo que podría afectar a los pobres y el fomento de la paz en las condiciones frágiles de una sociedad devastada por la guerra. Como resultado de la prioridad dada a la estabilización y el ajuste, otras cuestiones críticas de política no fueron puestas en la agenda. La reforma agraria, sostiene Boyce, no se encuentra en los responsables de las políticas ya que la redistribución de activos sería transgredir el mínimo papel otorgado al Estado (Boyce, citado por Pearce, 1999: 57). Segovia señala que un nexo de complementariedad entre crecimiento, reducción de la pobreza y la consolidación de la paz es absolutamente fundamental para el futuro económico a largo plazo de El Salvador. En el sector agrícola, la reforma agraria ofrece la ruta más segura para sacar provecho de esta complementariedad (Segovia, citado por Pearce, 1999: 57).

Capítulo 2

Las relaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC: una perspectiva histórica

En este capítulo la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es el tema central. Los conceptos que son de gran importancia como se explicó en el capítulo anterior, ahora veremos cómo están presentes en el caso específico de Colombia: las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. Primero se analiza la historia de este grupo guerrillero y cómo empezó que el gobierno veía a las FARC de tan importancia que empezaron el diálogo con este grupo y con sus diplomacias por la paz. Segundo, se habla de las estrategias de los presidentes de las tres últimas décadas. Tercero, el rol de los organismos internacionales en el caso colombiano. Y al fin del capítulo, la diplomacia radical del predecesor del presidente Santos: la política de mano dura de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, el tema de las conversaciones de paz en el contexto colombiano.

2.1 La violencia y el surgimiento de la guerrillera en Colombia

Aunque Colombia es una de las democracias más antiguas de América Latina, con una historia de crecimiento económico excepcionalmente consistente para la región, también es el hogar de uno de los grupos insurgentes de izquierda más arraigados en el mundo (Holmes *et. al.*, 2007). La violencia es un hecho de la vida en Colombia. Lo ha sido a lo largo de los 175 años de historia del país. La palabra ‘violencia’ sólo se utiliza para referirse a un período particularmente sangriento en la historia de Colombia, en el que unas 200.000 personas murieron: el periodo conocido como La Violencia. Sin embargo, mientras que la violencia ha prevalecido a lo largo de la historia de Colombia, ese aspecto de la violencia asociada con las guerrillas de izquierda es mucho más reciente y se remonta sólo a finales de 1940, cuando los campesinos liberales organizaron asociaciones de autodefensa en respuesta a los ataques conservadores durante La Violencia. Desde entonces, varios presidentes han tratado de sofocar este tipo de violencia con el éxito sólo limitado. Mientras que el Movimiento 19 de abril (M-19) y la mayor parte del Ejército Popular de Liberación (EPL) han sido desmovilizados, se estima que entre 10.000 y 15.000 guerrilleros permanecen activos, divididos principalmente entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), junto con un frente disidente del EPL (Boudon, 2009). En esta investigación se analiza sólo el caso de las FARC.

Los guerrilleros no causaron daño hasta la década de 1970, cuando los nuevos grupos terroristas urbanos comenzaron a aparecer. Comenzaron a secuestrar a personas importantes, debido a lo cual el Gobierno colombiano inició conversaciones de paz serias en 1989. Varios grupos guerrilleros más pequeños también participaron. Como parte del acuerdo, el Gobierno designó zonas desmilitarizadas temporales en el campo, donde las tropas rebeldes desmovilizadas estarían a salvo del acoso externo, para darles una medida de seguridad durante la negociación. El arreglo funcionó, y hoy en día muchos de estos exguerrilleros son prominentes políticos y funcionarios públicos. Pero las dos fuerzas guerrilleras más grandes, una de las cuales eran las FARC,

se negaron a desmovilizarse. Ambos grupos habían encontrado financiación independiente que aseguró su supervivencia en el campo e incluso se fortalecieron con el tiempo. La financiación vino de las plantaciones de coca donde cobraban honorarios para la protección de estas áreas (Pardo, 2000). Esto implicaba la relación entre el dinero de la droga y la continuidad de la guerrilla, lo que hizo la situación aún más compleja. A causa de la financiación independiente, los grupos guerrilleros pudieron hacer caso omiso de la presión de los de afuera si lo deseaban. Por otra parte, ni el Gobierno ni los rebeldes tenían alguna esperanza de victoria total en el campo de batalla. Por estas razones, y no por otras, el proceso de paz debió ser nutrido hasta no lograr algún resultado mutuamente aceptable. Los colombianos lo saben, pero el país necesitaba el apoyo de la comunidad internacional. Los extranjeros debían estar preparados para intervenir ante la presión y convencer a todas las partes para seguir con el diálogo cuando el proceso de paz se convirtiera en un punto muerto. Los forasteros, por ejemplo, podían asegurar a los rebeldes que nada iba a pasarles si deponían las armas. La mayoría de los miembros de grupos armados tenían que una vez que firmaran un acuerdo de paz y renunciaran a sus armas, serían asesinados o encarcelados. Estas preocupaciones eran totalmente legítimas, dado que durante un intento anterior de conversaciones de paz con las FARC a finales de los años ochenta, un partido político de las FARC fue aniquilado enteramente. Más de 3.500 miembros de ese grupo, la Unión Patriótica, o bien fueron asesinados o desaparecidos. Un crimen que no sólo aumentó las sospechas de los rebeldes, sino que redujo las perspectivas de la eventual creación de un partido político de izquierda democrática (Pardo, 2000). Ahora es relevante para la investigación saber qué visiones han tenido los presidentes sobre el proceso de paz durante este periodo. Los lugares en que hicieron progreso o dónde el proceso ha retrocedido.

2.2 La búsqueda de la paz en Colombia: la estrategia presidencial

Durante las tres últimas décadas todos los presidentes que estuvieron en el poder, a través de sus políticas, han tenido sus propios planes para acabar con el problema de las FARC. Todo empezó con la gestión del presidente Julio César Turbay (1978-1982) y su diplomacia por la paz, la primera en Colombia. La gestión de Turbay en el frente externo se caracterizó por una diplomacia para la pacificación forzada que fusionó confrontación y sumisión. La confrontación incluyó la política contra las contrapartes que contribuyeron al incremento de la guerra interna. Pero, aunque su gobierno consiguió más extracción y validación de fuera, aún era incapaz de superar la falta de estabilidad institucional para encontrar a la solución a la guerra interna y menos aún de prosperar en la superación efectiva de la violencia política (Chernick, 1988).

La administración siguiente fue la del presidente Belisario Betancur (1982-1986). Su opinión sobre este tema era que, en un proceso de paz, se tendría que abordar tanto las necesidades de los revolucionarios individuales como las causas políticas y estructurales de la violencia. En este proceso de paz había tres conceptos esenciales, la amnistía y asistencia a exguerrilleros, reforma política y la apertura democrática usando las negociaciones con guerrilleros, los foros institucionales y el Congreso para estimular la reforma política. El tercer aspecto fue la creación de un programa especial de desarrollo para las zonas más afectadas por la violencia a través de un programa conocido como Plan Nacional de Rehabilitación (PNR). Esto sería la base de un tipo de paz en el futuro, solo que a Betancur le faltaba el apoyo político y por ello su visión no tuvo éxito. Sin embargo, las FARC sí tenían el sentido de haber logrado más que

antes porque ahora estaban reconocidos como actores políticos. Aunque eso solo fue temporal puesto que la falta de apoyo causó que las FARC empezaran con la violencia real, comenzó la guerra sucia. Betancur solo no pudo implementar un cambio unilateralmente porque los eventos lo superaron. No tuvo demasiados aliados nacionales en los que podía confiar y tampoco los entes internacionales estaban presentes en el proceso de paz durante este periodo (Chernick, 1988).

Con la nueva administración del presidente Virgilio Barco (1986-1990) se crearon estrategias con un nuevo equipo negociador. La primera conclusión era que el control del proceso de paz debería ser colocado en el poder ejecutivo. En segundo lugar que el Gobierno debería partir de la premisa de que el Estado es la entidad política legítima y las guerrillas están operando fuera de la ley. En tercer lugar, que el Estado podría ser magnánimo y ofrecer amnistías, sin embargo el Gobierno no necesitaba aceptar a las guerrillas como representantes de la sociedad civil. En cuarto lugar, el Gobierno no estaba obligado a negociar reformas políticas y sociales con la guerrilla, estos dos elementos tendrían que estar centralizados en el proceso de las negociaciones y esos eran desarme y reincorporación a la sociedad. Barco seguía con el PNR de Betancur y decidió incrementarlo. El anuncio de su visión dio como resultado que las FARC no quedaron contentas, porque con esta nueva estrategia y la agenda reducida de negociación solo significaba un paso atrás en la mesa de negociación. Otro problema que tuvo lugar fue que la violencia de las calles era mucho mayor que la de las FARC y por eso eliminaron a las guerrillas del centro del escenario. El proceso de paz languideció. Barco sí alcanzó llegar a un acuerdo con otro grupo guerrillero colombiano, el M-19, que eran políticamente integrados con un acuerdo de desarme (Arnson, 2001).

El presidente César Gaviria, quien fue elegido en 1990, tuvo dentro de sus primeros objetivos el cómo implementar el deseo inmenso del pueblo para reformar la Constitución, como se había expresado en el plebiscito informal. Gaviria fue apoyado por la Corte Suprema, a través de elecciones extraordinarias que se organizaron. Para la asamblea constituyente, una comisión elegida tendría la plena autoridad para redactar una nueva Constitución, considerado como un instrumento para garantizar la paz. Los grupos guerrilleros que se desarmarían recibirían permiso para participar políticamente, un éxito para grupos como el EPL, el M-19, el PRT, etcétera, solo que este modelo de su predecesor, el ex presidente Barco no logró ganar el apoyo de las FARC ni del ELN. Estos declararon que no estaban interesados en las negociaciones limitadas y el desarme que definía en este momento el proceso de paz (Tokatlian, 1999). Después empezaron los ataques de ambos lados del Ejército Nacional y de las FARC. Para intentar terminar las insurgencias empezaron de nuevo el diálogo, solo que esta vez no insistieron en las condiciones previas. Las partes se reunieron en varias ocasiones, las negociaciones más interesantes hasta ese momento, revelaron oportunidades pero también obstáculos. La guerrilla colocaba un peso fuerte en la política local y en el poder central. Solo que los principales sectores de la sociedad y el Estado se resistían a este reconocimiento de su influencia en el ámbito local. El fracaso de los grupos guerrilleros que se transformaron en partidos políticos aseguraron a las FARC que este modelo del presidente Barco no sería una solución, ya que durante las negociaciones se forzaron a las FARC a aceptar al modelo estilo Barco, no tenía razón seguir con las negociaciones hasta que las éstas estuvieran basadas en cambios estructuralmente grandes, económica y políticamente (Tokatlian, 1999).

Ernesto Samper (1994-1998) logró que la guerrilla regresara como potenciales socios en las negociaciones de paz, porque su predecesor las había etiquetado como bandidos. Samper y su asesor de paz creían que el enfoque de las FARC era el desafío

político y que por eso la única solución tendría que ser una solución política negociada. También, crearon un modelo alternativo de negociación que los modelos, de Barco-Gaviria lo que para la guerrilla era de importancia esencial. La estrategia de negociar nunca había sido totalmente implementada, por razones de la crisis interna y la crisis con Washington con las que la política colombiana estaba muy ocupada durante este periodo. Después de tres años, cuando el gobierno Samper quería seguir con las conversaciones de paz, las FARC respondieron que no estaban interesadas, por tal razón no reconocieron al Gobierno como un interlocutor válido. Propusieron la destitución del presidente antes de estar dispuestos empezar con las conversaciones de paz (Leguizamo, 2002). El gobierno de Samper empezó una nueva táctica: armar a los civiles en las cooperativas de seguridad rural, lo que se denominó como ‘convivir’, las cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la autodefensa agraria, creadas para favorecer la autodefensa de los hacendados. Después el gobierno notó que así sólo iba a crecer la violencia. La creación de las ‘convivir’ esencialmente solo causó que los grupos paramilitares ilegales ahora pudieran seguir con sus actos legalmente (Arnson, 1999: 185). La diplomacia por la paz negociada por Samper apenas sí pudo servir para preservar una extracción y validación externa, solo que la inestabilidad institucional se profundizó aún más y la posibilidad de superar la guerra interna se hizo más distante. Más aún, Colombia comenzaba a vivir una genuina crisis humanitaria de enormes proporciones como la violencia política que se expresaba a través de casi diez muertos por día. La violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de los agentes estatales y de los grupos para institucionales se constituía en una nota predominante de la guerra irregular. Todo esto generó una tragedia humanitaria inigualable en el continente durante la década de 1990 (Leguizamo, 2002).

Andrés Pastrana, sucesor de Samper, fue elegido en 1998. La influencia de los EE.UU se notaba muy claramente en este periodo. Pastrana también lo anunció en su plan pacificador. Los EE.UU. tendrían un papel en el proceso como facilitadores de las condiciones de pre-negociación, asesoría de fórmulas de entendimiento para impulsar a las negociaciones, testigos de los compromisos adquiridos y como instituto de verificación de los compromisos hechos. Una especie de Plan Marshall, que debería ser ejecutado para poder desarrollar inversiones en el campo social, el sector agropecuario y en la infraestructura regional con el fin de ofrecer a los campesinos alternativas diferentes a los cultivos ilícitos (Tokatlian, 1999). El apoyo de los Estados Unidos se veía explícito y cada vez más cauto y ambiguo, porque no se veían escasos avances en el proceso interno de diálogo y de las negociaciones de paz y eso también generaba escepticismo en Washington.

El apoyo de Europa y América Latina también incrementó. Sin, embargo la situación presente en el país lo llevó a ser percibido como una amenaza regional, por lo que se evidencia que las contrapartes de Colombia se dispusieron a participar por la paz. La administración Pastrana no parecía dispuesta, tanto por condiciones internas como internacionales, por culpa de los recursos económicos externos que el Estado continuó recibiendo, lo que significó un elemental respaldo político del exterior. Puede existir una forma de apoyo del exterior, sin embargo la administración Pastrana no podría intensificarse retóricamente en el frente internacional porque en el plano nacional no se producía un genuino avance en la resolución pacífica de la guerra (Tokatlian, 1999). Todas estas diplomacias por la paz no habían tenido mucho éxito y no hicieron mucho progreso en el proceso para llegar a un acuerdo de paz. Lo que es interesante de ver es la diplomacia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, un caso extremo. En el párrafo siguiente se explican las influencias de los órganos internacionales en el pasado en el caso de Colombia, y en el párrafo 2.4 se analiza la

visión del expresidente A. Uribe acerca de cómo deben ser abordadas las FARC, es decir, su estrategia de la mano dura.

2.3 Influencias internacionales

La frecuencia y la intensidad de la acción militar internacional en el caso de los conflictos violentos y el crimen ha aumentado desde la década de 1990, en la que los medios de información empezaron a ser asequible para todos, también para las regiones más pobres de América Latina (Boyle, 1996). Cuando los militantes de partidos políticos interactúan con economías ilícitas producen interacciones inestables. Especialmente a la lucha contra la delincuencia doméstica que amenaza la seguridad nacional, o la resolución de conflictos militares que involucran a criminales y economías ilícitas, que requieren un acto complejo, matizado y calibrado cuidadosamente. Los gobernantes piden ayuda en proyectos. Como en el caso de la Operación Orión iniciada por el ex presidente Álvaro Uribe, quien desplegó a los militares para volver a tomar comunas pobre de las ciudades gobernadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, todo ese esfuerzo por lograr recuperar territorios y seguridad de las personas afectadas, terminó en homicidios debido al liderazgo corrupto destinado por la panoplia de escudos criminales (Boyle, 1996).

En este contexto es muy claro que las instituciones internacionales han fallado a las expectativas de las poblaciones en América Latina. Por situaciones como la que se expone aquí arriba la población pierde la confianza en la comunidad internacional. La participación de los actores internacionales en las conversaciones de paz con las FARC fue realizada desde diciembre 1999, aunque tanto el Gobierno colombiano como las FARC inicialmente lo resistieron. En marzo del año 2000 los líderes más importantes del sector privado viajaron a la zona del despeje para reunirse con las FARC e investigar su disposición para hacer compromisos con una solución negociada y para discutir la política agrícola y social. La respuesta de las FARC en este momento fue una demanda de 1 millón de dólares como impuesto de paz. En junio siguieron con las conversaciones cuando representantes de algunos gobiernos europeos, de Japón y las Naciones Unidas se reunieron en la zona del despeje para hablar sobre el desarrollo alternativo para los campesinos dedicados a los cultivos de coca. En septiembre las conversaciones resultaron en una crisis cuando un preso rebelde escapó de la cárcel, secuestró un avión y lo obligó a aterrizar en la zona de despeje. El Gobierno exigió que el preso fuese devuelto a su custodia, pero las FARC se negaron a ello. También en esta ocasión esta guerrilla exigió que el gobierno colombiano suministrara prueba de las acciones contra los paramilitares (Chernick, citado por Arnson, 1999: 191).

Estos son ejemplos del proceso de negociación de paz durante los cuatro años de la administración del presidente Andrés Pastrana; el fracaso de las FARC de corresponder a las iniciativas del Gobierno con sus propios gestos; la prioridad otorgada por los insurgentes a un vigoroso esfuerzo contra los grupos paramilitares; y el papel de las cuestiones socio-económicas, al desarrollo alternativo en las zonas productoras de drogas, en la agenda de negociación. El Plan Colombia no tuvo mucho éxito; los Estados Unidos interfirieron efectivamente en el problema dándoles apoyo para una fundación, aunque la primera mitad del año 1999 las FARC mostraron que no estaban dispuestos a hacer negociaciones. La interferencia de los Estados Unidos sólo provocó que el carácter del Gobierno colombiano se interpretara como que los

había defraudado. El problema central de la política de los Estados Unidos en Colombia sobre el proceso de paz es que su enfoque excesivo en la dimensión militar y en privar a la guerrilla de los recursos económicos como la droga. Esto les impide pensar en otras maneras para solucionar el problema de paz (Arnson, 2001). A lo largo de esta tesis se analiza el papel que juega la comunidad internacional en el proceso de las negociaciones por la paz entre el Gobierno colombiano y las FARC durante la presidencia de Santos.

2.4 Uribe y la ‘mano dura’

Anteriormente en este estudio se mencionó al ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Uribe comenzó a poner en práctica su programa desde el momento en que fue electo. Durante su campaña el anunció una propuesta de reforma política que destacó como una estrategia contra la corrupción. Una estrategia de negociación astuta está detrás de la evolución del referéndum y el Acto Legislativo de Reforma Política: una propuesta de un Congreso unicameral y la revocación de los mandatos del Congreso a fin de asegurar la aprobación del referéndum, seguido de un referéndum ya aprobado para asegurar el paso de la ley de reforma. Si el programa del presidente Uribe tiene una alta prioridad, eso será la recuperación de la llamada seguridad democrática en Colombia, es decir, tratar de garantizar la viabilidad de la democracia, mientras se fortalece al Estado y se asegura su legitimidad. La estrategia de seguridad democrática del presidente es multifacética e incluye varias políticas que tienen como objetivo fortalecer el Ejército y la fuerza policial, desmantelar la producción de drogas ilegales, la modernización del sistema de justicia y atender a áreas económicamente deprimidas y afectadas por los conflictos. Estas políticas han tenido resultados mezclados con respecto a la violencia en Colombia. Uno de los buenos resultados es que ni una sola ciudad ha sido tomada por la guerrilla desde el comienzo de la administración Uribe (Cepeda, 2003).

Su política está conocida como una política de ‘mano dura’, la que se inclina a solucionar el conflicto armado que ha afectado el país hace más de cincuenta años. A diferencia con la política de su predecesor Andrés Pastrana, en la que se realizaron infructuosas concesiones a las guerrillas especialmente a las FARC para la solución negociada al conflicto, el programa político realizado por Uribe tenía a la seguridad como el tema más relevante de su campaña electoral. Él tenía la visión de que el tratamiento de los ‘enemigos internos’ tenía que cambiar y que el autoritarismo del Estado, sobre temas de recuperación de la soberanía perdida en partes del país, tenía que reforzarse. Metas que eran difíciles para lograr, pero las expectativas eran fuertes para proyectar un nuevo estilo de gobierno (Galindo, 2006). Estas metas se pueden interpretar como un medio para mejorar el grado de la legitimidad del Estado y del liderazgo.

Un aspecto fundamental de la política de seguridad democrática del presidente Uribe es la negociación con los diferentes grupos armados ilegales, que se consideraron primero terroristas por el Departamento de Estado de los EE.UU., y más tarde también por la Unión Europea y Canadá. En respuesta a los ataques terroristas en Bogotá el 7 de febrero de 2003, el gobierno de Uribe emprendió una ofensiva diplomática, lo que resultó en una condena unánime de las FARC por los presidentes de Centroamérica y el Consejo Permanente de la OEA (Organización de Estados Americanos). La Unión Europea y el Consejo de Seguridad de la ONU condenaron los ataques terroristas y expresaron su solidaridad con la defensa de la democracia

colombiana. Y aunque los países vecinos no respondieron positivamente a la solicitud del presidente Uribe de denominar a las FARC como un grupo terrorista, sí participaron en la Conferencia sobre la Seguridad Regional en Bogotá del 12 de marzo de 2003. En esta reunión, los vecinos de Colombia reiteraron el contenido de la Declaración del Consejo Permanente de la OEA y reafirmaron su apoyo a los instrumentos internacionales contra el terrorismo, en particular la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU (que pedía a los Estados trabajar de consuno urgentemente para prevenir y reprimir actos terroristas y la financiación y preparación de tales actos). Además, se comprometieron a colaborar en la lucha regional contra el terrorismo y acordaron trabajar sobre el tema en grupos especializados.

El presidente Uribe ha reiterado su voluntad de negociar con los grupos armados de Colombia, primero se comprometieron a un alto al fuego, bajo supervisión internacional (Cepeda, 2003). Para lograr tal seguridad democrática, el gobierno propone una estrategia integral que incluye al fortalecimiento de la fuerza pública para recuperar el control sobre el territorio y la protección de la infraestructura nacional y, además, la desarticulación de la producción de drogas, el fortalecimiento de la justicia y la atención a deprimidas y víctimas del conflicto (Galindo, 2006). Uribe ha sostenido que la guerrilla se sorprendería por su generosidad una vez que se cumpla esta condición mínima, y ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesto a ser paciente ya que estos grupos a favor de proceder con la desmovilización y el desarme. Sin embargo, no se ha hecho ningún progreso en este frente, que puede ser, al menos en parte, atribuido a los fracasados esfuerzos anteriores de negociaciones. Mientras que el presidente Uribe ha mostrado apertura inesperada y flexibilidad, ya que su discurso de toma posesión, en el trato con las posibles negociaciones de paz con las FARC, que incluyen la disposición a confiar al Secretario de las Naciones Unidas los esfuerzos de carácter general, lo que ha mostrado algunos signos positivos (Cepeda, 2003). Durante su segundo mandato varios eventos en 2008 debilitaron considerablemente el grupo guerrillero (Beittel, 2014). Uribe insistió en que las conversaciones de paz apropiadas o diálogos no podrían tener lugar mientras el grupo terrorista ha intensificado sus ataques violentos: un aumento del 17% en el último año.¹ El expresidente se refirió repetidamente a la guerrilla de las FARC como ‘narcoterroristas’, negándoles cualquier legitimidad política (Caistor, 2013). El estilo político de gobierno y la figura personal de Uribe representa una ruptura significativa con respecto a sus antecesores y otros líderes políticos importantes en Colombia.

El alto grado de apoyo popular de Uribe reflejaron los avances en seguridad y mejoras notables que se acompañan en la estabilidad económica durante su mandato, a pesar de que sus políticas fueron criticadas por organizaciones de derechos humanos. La política de la seguridad democrática del expresidente Uribe hizo de la seguridad ciudadana la preocupación preeminente de la acción del Estado. Combinó esfuerzos antiterroristas y antinarcóticos en un enfoque coordinado con el objetivo de hacer valer el control estatal sobre la totalidad del territorio nacional. Entre 1998 y 2002, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habían crecido un 60%, hasta 132.000 miembros. Antes de que el gobierno de Uribe se hiciera cargo en 2002, el gobierno colombiano había tratado el crecimiento de las FARC y el narcotráfico como temas separados. Después de que las negociaciones entre el gobierno de Pastrana y las FARC fracasaran, el gobierno colombiano abandonó su estrategia de tratar de negociar con la insurgencia guerrillera. Como está mencionado antes, Uribe reorientó los esfuerzos en

¹ Declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez; Caistor, N. (2013). ‘Colombia: Alvaro Uribe and the Peace Talks’, *Latin America Bureau*, sitio: <http://lab.org.uk/alvaro-uribe-and-colombias-peace-talks>.

derrotar a la guerrilla, y este fue el impulso principal de su política de seguridad democrática, incluyendo la invasión lanzada en 2003 contra los bastiones de las FARC en el sur de Colombia, llamado Plan Patriota. Para el final del segundo mandato de Uribe en agosto de 2010, el ejército colombiano llegó a 283.000 miembros y la policía nacional numerada a 159.000 (Beittel, 2014). Se puede opinar que la diplomacia por la paz de Uribe fue más exitosa que la de sus antecesores. Especialmente durante su segundo mandato tuvo éxito. Aunque no ha acercado el acuerdo de paz con las FARC, sí empezó con una estrategia radical y nueva. Siguiendo el Plan Colombia y el dinero invertido durante los años de Uribe en la lucha contra los rebeldes, el Estado colombiano ha surgido sana y económicamente exitoso, mientras que las guerrillas están en sus últimos coletazos. El gobierno está en una posición mucho mejor que antes para ofrecer a las FARC lo que quieren. Las leyes de justicia de transición están en el lugar que permita un acuerdo negociado por las sanciones penales, y también se encuentra abierto el camino para la representación política (Howlett, 2012).

Lo que es notable de ver es que en la diplomacia de paz del presidente Uribe los conceptos del primer capítulo para hacer las negociaciones de paz favorables, todos estuvieron implicados. El fortalecimiento de la democracia ha contribuido a que la legitimidad del Estado mejorara. También el apoyo de la población ha mostrado que se veía al Estado como legítimo. El fenómeno de hacer posible que un presidente fuera electo dos veces y que resultó en el segundo mandato de Uribe, ha mostrado que también se veía al presidente como legítimo para querer tenerlo por la segunda vez como presidente. También el tema de la justicia ha estado presente en la diplomacia de Uribe por la paz y la implicación de los actores internacionales que lo apoyaron, han sido aspectos positivos que acercaron a la posibilidad de hacer negociaciones. Solo que las FARC por todos los ataques que recibieron del gobierno Uribe, no estaban dispuestas a hacer negociaciones con ellos. No lograron llegar a un acuerdo de paz, pero sí se puede opinar que el gobierno colombiano ahora sí está en el camino correcto para solucionar el conflicto armado con las FARC.

Capítulo 3

El presidente Santos y las conversaciones de paz en Colombia

En este capítulo se profundiza en la situación del presidencial de Santos y específicamente en cómo los gobernantes están dedicándose al tema de las negociaciones de paz para solucionar el conflicto armado con las FARC. Primero se lo analiza desde el comienzo de la política de Juan Manuel Santos en el marco del conflicto con las FARC y al grado de la legitimidad de su liderazgo. Segundo, veremos la estrategia que ha formulado Santos, la que está utilizando durante las negociaciones de paz para tratar de llegar a un acuerdo de paz y cómo está presente el concepto de justicia. Tercero, el papel que juegan los actores internacionales. Y al fin de este capítulo se menciona las opiniones de unos autores sobre la posibilidad de lograr un acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC con la estrategia del presidente Santos o con la ausencia de esta estrategia. ¿Qué hay que esperar de la continuación de las negociaciones de paz si Santos es electo por segunda vez? Con este debate sobre el tema de las conversaciones de paz durante la presidencia de Santos se termina la investigación de este estudio.

3.1 La legitimidad de la persona de Santos como representante de Colombia

En el capítulo anterior vemos a los presidentes de las tres últimas décadas y la presidencia de Uribe, el predecesor del presidente Juan Manuel Santos que era ministro bajo la presidencia de Uribe. En el sitio de las noticias de Colombia sobre la política en un artículo del 28 de agosto del año 2012 con el título *Dare we dream of peace in Colombia?*² se mencionaron que el presidente Santos confirmó que su gobierno había entrado en las conversaciones exploratorias con las FARC para poner un fin a los 50 años de conflicto. Anteriormente a esta confirmación el canal de televisión venezolana Telesur reportó que ambas partes habían firmado un acuerdo para avanzar en las negociaciones de paz oficiales programadas para el 5 de octubre en Oslo (Howlett, 2012). En el periódico digital *El Economista* se mencionaron que esta iniciativa del gobierno colombiano fue la primera vez desde el año 2002 que empezaron con las negociaciones oficiales (Forero, 2012). Las conversaciones empezaron en Oslo (Noruega) en octubre del año 2012 y se trasladaron a La Habana (Cuba) donde las conversaciones se continuaron. Algunos observadores sostienen que las condiciones pueden ser más atractivas hasta la fecha para las dos partes a negociar un acuerdo de paz en lugar de seguir luchando (Beittel, 2014).

Durante su campaña, Santos prometió que iba a continuar con la política de seguridad y comercial de su predecesor, mientras seguía una agenda de reformas en un programa que llamó ‘prosperidad democrática’. Durante su inauguración en agosto de 2010, el presidente Santos dijo que la puerta a negociar el fin del conflicto armado de cinco décadas no se ha cerrado. Varias de las reformas promovidas por el gobierno de Santos reorientaron la postura del gobierno frente a los conflictos armados tanto a sus víctimas internas que a sus combatientes. En junio de 2012 el Congreso colombiano

aprobó otra iniciativa gubernamental, la Ley Marco de la Paz. Esta enmienda constitucional proporciona una estructura de justicia de transición para un eventual proceso de paz si el Congreso aprueba la promulgación de esta legislación. A finales de agosto de 2013, la Corte Constitucional de Colombia confirmó esta ley. Otro proyecto de ley de reforma constitucional que aprobó el Congreso de Colombia a finales de diciembre 2012 por un amplio margen a pesar de la controversia se expandió la jurisdicción de los tribunales militares (Beittel, 2014). Estas dos leyes, junto con el apoyo de los actores internacionales, hicieron la situación aún más favorable para empezar con las negociaciones de paz. El marco para las conversaciones de agosto 2012, firmado por ambas partes, se identificaron seis temas principales que se abordarán durante las negociaciones: (1) desarrollo rural y política de tierras; (2) participación política de las FARC; (3) poner fin al conflicto armado que incluye la reinserción en la vida civil de las fuerzas rebeldes; (4) cultivos ilícitos y tráfico ilícito de drogas; (5) reparación de las víctimas, y (6) aplicación del acuerdo negociado final, incluyendo su ratificación y verificación. El primer tema que se esté discutiendo, la tierra y el desarrollo rural, fue uno de particular importancia para las FARC debido a sus orígenes campesinos rurales y su preocupación histórica con los patrones de tenencia desigual de la tierra de Colombia. El acuerdo sobre este marco también identifica los roles de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile para apoyar el proceso de negociación. El anuncio de las conversaciones fue muy elogiado desde dentro y fuera de la región (Beittel, 2014).

Según Salamanca, se han hecho algunas buenas decisiones en relación con las negociaciones de La Habana: la forma en que las conversaciones preparatorias se mantuvieron discretas; el reconocimiento público de los aspectos claves del conflicto armado como las víctimas y el despojo de las tierras; y el reconocimiento de los problemas de seguridad que enfrentan los defensores de los derechos humanos (Salamanca, citado por Ramsbotham y Wennmann, 2014: 26). Sin embargo, el entendimiento general entre los colombianos de las negociaciones de La Habana es una discusión a distancia entre las élites gubernamentales, élites empresariales y el liderazgo de las FARC. Pero esto no significa que las negociaciones estén equivocadas. Precisamente porque están entre las élites y tienen lugar fuera de Colombia, las conversaciones pueden, de hecho, ofrecer un acuerdo sobre cuestiones claves. Los seis puntos de la agenda de las conversaciones abordan los principales desafíos de la participación, los derechos humanos, la justicia económica, el desarrollo social, la participación activa regional e internacional y la expansión de la democracia (Ramsbotham y Wennmann, 2014). Muy pocos colombianos hoy en día piensan que un enfoque armado sea una forma legítima de generar el cambio. Pero igualmente, pocos consideran que los partidos políticos sean legítimos, que el Congreso sea legítimo, que el gobierno sea legítimo, o que el sistema de justicia sea legítimo. Aunque el gobierno de Santos muestra que si se lo pueden considerar como legítimo, la población de Colombia ha perdido la confianza en el Gobierno colombiano en general después de tantos fracasos. Hay una grave crisis de credibilidad e intenso escepticismo sobre las instituciones colombianas. Las negociaciones de La Habana son legítimas porque están buscando poner fin a una guerra de 50 años. Pero su continua legitimidad se mide por su aceptación por parte de la sociedad colombiana y su conexión con un proceso de paz más amplio (Salamanca, citado por Ramsbotham y Wennmann, 2014: 27). Aquí vemos que el grado de la legitimidad de Santos es relativamente alto, por la manera como fue electo (democráticamente) y las leyes que ha establecido, también el proceso de las negociaciones de paz se puede considerar como legítimo.

3.2 La presencia de la justicia en la presidencia de Santos

Todo empezó con la instauración de Juan Manuel Santos como presidente de agosto de 2010, que había prometido en su campaña electoral continuar con las políticas de seguridad agresivas de su predecesor, de modo que la campaña contra el liderazgo de las FARC continuó. El gobierno colombiano sufrió un golpe significativo a la guerrilla matando a uno de los altos comandantes militares de las FARC, Víctor Julio Suárez (mejor conocido como el “Mono Jojoy”), en septiembre de 2010 en una redada en su complejo en el centro de Colombia. Un año más tarde, en noviembre de 2011, el ejército colombiano localizó y asesinó al jefe máximo de las FARC, Alfonso Cano, quien había reemplazado al fundador Manuel Marulanda en 2008. Una semana después, las FARC anunciaron que su nuevo líder sería Rodrigo Londoño Echeverri (conocido como “Timoleón Jiménez” o “Timochenko”), que rápidamente hizo una obertura pública al gobierno de Santos para abrir un diálogo político. En un anuncio en febrero de 2012, las FARC anunciaron que iban a liberar a todos sus rehenes canjeables (personal de seguridad que las FARC habían capturado o secuestrado) y poner fin a su práctica de secuestros para pedir rescate. En abril de 2012, las FARC liberaron a lo que, afirmaron, eran sus últimos 10 policías y militares secuestrados. A pesar de las aperturas públicas del líder de las FARC Timochenko para colaborar con el gobierno de Santos en un diálogo político a finales de 2011 y principios de 2012, el gobierno colombiano afirmó que las FARC no estaban cumpliendo con sus criterios mínimos para participar en las discusiones de paz. El gobierno sugirió que tales criterios podrían incluir la liberación de todos los rehenes (no sólo los miembros de las fuerzas de seguridad), un alto al fuego, el fin de la utilización de las minas terrestres y un alto en el reclutamiento de niños soldados (Beittel, 2014). Lo que finalmente sí ha resultado en diálogos previos hasta que hicieron un acuerdo, lo que está mencionado antes, para comenzar con las negociaciones de paz oficiales. Aquí es muy claro que con asesinar a estos criminales hay un cierto grado de justicia presente, porque los actos de ellos produjeron muchas víctimas.

3.3 El rol de los actores internacionales en la diplomacia por la paz de Santos

Las relaciones de Colombia con los países vecinos, Ecuador y Venezuela, también parecían haber contribuido en las bases para las conversaciones de paz. Poco después de que Santos fue instaurado como presidente, las relaciones diplomáticas entre Colombia y los dos países se han restablecido, después de haber sido interrumpidas durante la presidencia de Uribe. Relaciones mejoradas con los gobiernos de izquierda han llevado a una mayor cooperación en materia de comercio, la lucha contra el narcotráfico y la seguridad. Por otra parte, el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez jugó un papel importante en la facilitación de la participación de las FARC en la fase exploratoria de conversación de paz a partir de principios de 2012. Los primeros contactos entre los líderes de las FARC y el gobierno de Santos a fines de 2010 también reportaron la participación del apoyo de Chávez. Los 7 billones (US\$) invertidos por los Estados Unidos, mayoritariamente en concepto de ayuda militar, entre 2000 y 2012 consolidó aún más la relación con el Gobierno colombiano, por lo

que el Ejército colombiano, uno de los más fuertes y capaces de la región y mejor preparado para jugar el papel global previsto por los Estados Unidos. Estas inversiones han significado que los Estados Unidos están presente sobre el terreno. Cientos de militares y contratistas estadounidenses están estacionados en diferentes bases militares. En efecto, los Estados Unidos se ha convertido cada vez más en parte en este conflicto como lo era antes en El Salvador (Richani, 2013). El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, ha visitado Colombia en agosto del 2013. Él expresa su firme apoyo al proceso de paz indica que la administración de Obama está dispuesta a ayudar en la etapa post-conflicto. El rol de los actores internacionales en el caso de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC es principalmente el papel del apoyo. Entonces los países vecinos apoyan a Colombia en el paso hacia la paz y el apoyo de los Estados Unidos incluye básicamente los recursos financieros.

Uno de los principios de las negociaciones de paz en curso en el marco del acuerdo es que nada está acordado mientras no esté todo acordado, porque los compromisos asumidos por el gobierno y las FARC no se promulgarán y siguen siendo provisionales hasta que haya un acuerdo global firmado por ambas partes (Beittel, 2014). Algo que se puede considerar imposible con las dos partes totalmente opositoras. Ahora es interesante ver si el presidente Juan Manuel Santos será electo por segunda vez. En noviembre de 2013 anunció su candidatura a la reelección para un segundo mandato, declarando su intención de “terminar el trabajo” de concertar un acuerdo de paz (Beittel, 2014). Se había especulado que él no se postularía a la reelección, debido a las fuertes críticas durante su primer mandato para no continuar con las fuertes medidas antiterroristas de su predecesor Álvaro Uribe y para la apertura de conversaciones de paz con el grupo guerrillero de las FARC, que atrajo fuertes críticas de la sección de Uribe, aún muy popular y una gran parte del público, lo que resulta en bajos niveles de audiencia de popularidad. El expresidente Uribe, quien una vez consideró al presidente Santos como su protegido, se ha convertido en su mayor crítico. Su crítica frecuente del proceso de paz, previamente difundido ampliamente por los medios de comunicación social, que ahora pasará a formar parte del debate en el Senado colombiano y la cámara baja, donde el Centro Democrático también ganó escaños, aunque menos que en el Senado. La situación de seguir con las negociaciones de paz parece muy favorable. ¿Van a llegar a un fin del conflicto de cinco décadas y que la paz sea una realidad? ¿Y qué es lo que se puede especular sobre la continuación de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC?

3.4 Las opiniones sobre la continuación de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, la situación para realizar las negociaciones de paz durante la presidencia de Santos parece ser muy favorable. ¿Entonces, si ambas partes lo quieren, sería factible poner fin al conflicto armado? Un evento histórico es que por primera vez en la historia las elecciones nacionales están teniendo lugar durante un proceso de paz con las FARC. El 9 de marzo 2014 los candidatos que apoyan y se oponen a las negociaciones de paz competían por escaños en el Senado de 102 miembros y la Cámara de Representantes de 166 miembros. Es de destacar que el expresidente Uribe, impedido de buscar un tercer mandato presidencial, se postuló para el Senado y ganó. Él es un ferviente opositor de las conversaciones de paz de Santos. Uribe tomó una estrategia dura, alegando que Santos

fue demasiado complaciente con las FARC y sus partidarios de izquierda de todo el mundo.² La estrategia dura de Uribe se convirtió en un llamado a la guerra durante las elecciones del año 2014. A consecuencia de que Uribe no podía aspirar a la presidencia debido a los límites constitucionales, su campamento eligió Zuluaga como el seguidor obediente con ningún otro mensaje de estar en contra de las conversaciones de paz (De Onis, 2014). Su nuevo partido, el Centro Democrático, fue lanzado para derrotar al presidente Santos y sus políticas, especialmente su preocupación por su buque insignia, el proceso de paz con el grupo insurgente más grande de Colombia. Hay diferentes fuentes y personas con sus propias opiniones y argumentaciones sobre la posibilidad de que Santos solucionaría la guerra con las FARC a través de las conversaciones de paz con un acuerdo si resultaba reelecto. Para empezar con el libro de Arnson (1999), allí se señala que la paz es posible en Colombia. El camino hacia una democracia participativa y una economía desarrollada tiene que pasar a través de una serie exitosa de negociaciones que terminarán con los múltiples conflictos armados y extender la legitimidad y el alcance del Estado. El fracaso en esta coyuntura podría condenar al líder de otra generación a escribir su historia como sus predecesores lo hicieron: a través de actos de violencia o a través del coraje político que pueda ser recompensado con la bala de un asesino (Arnson, 1999: 190).

En el documento del servicio de investigación del Congreso se señala que, aunque las encuestas indican que la mayoría de los colombianos sigue viendo la iniciativa de Santos por la paz favorablemente, una parte mucho más pequeña de la población es optimista de que un resultado exitoso es probable. El progreso en las conversaciones de paz, o posibles interrupciones, ha sido y seguirá siendo un tema clave de debate en las elecciones de 2014. Y que los observadores han visto las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2014 como un referéndum sobre el proceso de paz, que ha sido la política de la firma del presidente Santos (Beittel, 2014).

Al lado de la falta de esperanza en una solución final de la población colombiana, lo que también se puede considerar como un obstáculo es el grado de la verdadera justicia y legitimidad del Estado. En el documento de servicio de investigación del Congreso se refirió al hecho de que las preocupaciones sobre el potencial acuerdo de paz y la participación política de las FARC se avivaron por los informes de violencia contra los movimientos y partidos de izquierda. En enero de 2014, como resultado de la violencia contra sus miembros, el movimiento político de izquierda Marcha Patriótica, vista por algunos observadores como un vehículo probable para la futura participación política de las FARC, ha anunciado que podría disolverse. Cerca de 30 miembros de la Marcha Patriótica han sido asesinados desde 2012. Esta situación plantea la preocupación de que para las FARC la participación política bajo un futuro acuerdo de paz será obstaculizado por una campaña de violencia, como sucedió en la década de 1980 (Beittel, 2014). Sobre el partido político de las FARC, la Unión Patriótica, fue diezmada por unos 3.000 asesinatos. Lo que está mencionado anteriormente en este estudio en el párrafo 2.1.

Sobre el rol de los actores internacionales se dice en el documento de servicio de investigación del Congreso que si las conversaciones de paz no llevan a un acuerdo, las implicaciones para la política de EE.UU. no están seguras, pero son más propensas a seguir las tendencias recientes. Es probable que Estados Unidos continúe su retiro gradual de la asistencia a Colombia para que los programas se conviertan gradualmente

² Declaraciones del expresidente Álvaro Uribe; De Onis, J. (2014). 'Colombia's voters uneasy with FARC peace talks', *World Affairs Journal*, sitio: <http://www.worldaffairsjournal.org/blog/juan-de-onis/colombias-voters-uneasy-farc-peace-talks>.

en la gestión y el control colombiano. El gobierno de EE.UU. puede seguir apoyando la indemnización a las víctimas del conflicto a través de una mejor aplicación de la Ley de Víctimas, 107 y otros programas humanitarios y de derechos humanos relacionados. Dentro de Colombia, un proceso de paz fallido puede hacer que sea políticamente difícil volver a la mesa de negociaciones para el gobierno de Santos o de sus sucesores. Algunos analistas predicen que las FARC pueden ser capaces de seguir luchando dentro y existir para otros 10-15 años. Los costos humanos y económicos del conflicto tendrían que soportar y, según algunos analistas, seguirá amortiguando el potencial económico de Colombia (Beittel, 2014).

En un artículo del sitio de Colombia Politics se menciona que Santos está desesperado por su legado de ser el presidente que entregó la paz a Colombia. Y que, además de las capacidades de Santos, hay otras razones para ser optimistas de que no se repitan los errores del pasado. El más importante es tal vez el cambio en la dinámica entre el gobierno y las FARC. En 2002 el Estado era débil mientras que los guerrilleros estaban en ascenso (Howlett, 2012). También se mencionan en este artículo que las condiciones no son perfectas; las FARC siguen siendo una fuerza cuyos actos de atrocidad han aumentado de manera espectacular desde el comienzo del año. Pero las condiciones nunca serán ideales, y está claro que ni el Gobierno ni la guerrilla ha logrado sus objetivos a través de medios militares (Howlett, 2012).

El viceprimer ministro de Irlanda Martin McGuinness ha sostenido un encuentro con el presidente colombiano. Y después de ese encuentro McGuinness mencionó que: el presidente Santos había demostrado un gran coraje y una tremenda visión de un futuro de paz para Colombia y que quería ofrecer su apoyo al proceso (BBC News, 2014). Dijo textualmente:

“Creo que el hecho de que las negociaciones se llevan a cabo en La Habana indican que las FARC y el gobierno reconocen que hay una perspectiva muy real para un acuerdo duradero que beneficiará a toda la gente de Colombia. El proceso de paz en Irlanda es ahora ampliamente reconocido por la comunidad internacional como uno de los procesos de paz de mayor éxito en el mundo de hoy. Durante tres décadas, tuvimos una muy amargo conflicto que muchas personas en el país y en la comunidad internacional que se cree fue incapaz de resolución. Creo que muestra claramente que cuando se tiene gente con experiencia política, coraje político y la visión política para el futuro, lo imposible se puede superar.”³

Según Salamanca, las negociaciones de La Habana deben convertirse en la base para la transformación de los conductores de los conflictos estructurales para garantizar nuevas oportunidades para una sociedad que es a la vez asustado y corrupta, tanto en víctimas como en victimario (Ramsbotham y Wennmann, 2014).

Hay voces positivos y voces negativos sobre la continuación del proceso de paz en el caso de Colombia. Predecir lo que sucederá en las conversaciones de paz es altamente especulativo, dadas las muchas limitaciones que las conversaciones se enfrentan. Y, por supuesto, hay muchos que se preguntan si las FARC están negociando de buena fe o si los dirigentes de la organización tienen la voluntad política para hacer que las negociaciones lleguen a una conclusión (Beittel, 2014). Sin embargo, hay varias razones para un cauteloso optimismo de que las conversaciones actuales puedan producir un acuerdo de paz, con algunos analistas proyectando un posible

³ Declaraciones del Viceprimer Ministro Martin McGuinness de Irlanda sobre su encuentro con el presidente Santos; BBC News (2014). ‘Colombia peace talks: Martin McGuinness meets President Santos’, en: sitio de BBC News.

acuerdo antes de finales de 2014. Algunos analistas describen el estado del conflicto como “maduro” para ambas partes a optar por una solución negociada o política (Isacson, 2012). Equipo negociador del gobierno representa un amplio espectro de grupos influyentes en Colombia. Así, la aceptación de estos representantes influyentes de los sectores clave puede ayudar a que el apoyo de los sectores más probables. Las conversaciones de paz entre el gobierno de Santos y las FARC también pone remedio a una debilidad de algunas conversaciones de paz anteriores que se hicieron en el interior del país. Por el contrario, las actuales conversaciones se llevan a cabo con relativa discreción en Cuba. Por otra parte, se han producido importantes funciones asignadas a los agentes internacionales para facilitar estas conversaciones, incluyendo el papel de apoyo de Cuba y Noruega como ‘garantes’ de las conversaciones, y el rol de Venezuela y Chile de ser los acompañados (Isacson, 2012). Según el hermano del presidente Santos, Enrique Santos, un periodista muy conocido en Colombia que tuvo un papel en los primeros contactos entre las FARC y el Gobierno, el apoyo fundamental del expresidente de Venezuela Hugo Chávez para fomentar la participación de las FARC en el proceso de paz fue significativo.⁴ Las conversaciones de paz anteriores entre el gobierno colombiano y las FARC no han tenido un papel importante para los mediadores internacionales como es ahora el caso (Beittel, 2014).

⁴ Declaraciones del periodista colombiano Enrique Santos en una presentación sobre el proceso de paz en Colombia en el Centro Woodrow Wilson for International Scholars, Washington, DC, 30 de enero de 2013; Santos, E. (2013). ‘Presente y futuro del proceso de paz’, *Fundación Ideas para la Paz*.

Conclusión

Este estudio ha tratado de dar respuesta a la pregunta principal: ¿qué actores y factores resultan tener una función decisiva en el éxito o fracaso de las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC? Ello se ha abordado a través de los tres conceptos que según el debate académico son considerados como importantes. Primero, el de la legitimidad del estado de desmilitarización. Si vemos la historia de Colombia, la estrategia presidencial de las tres últimas décadas, podemos concluir que no se han acercado a la paz a través de los actos militares. Entonces puede decirse que es más favorable para el proceso de las negociaciones de paz que el Estado sea legítimo y que ambas partes no responden con las armas. En el párrafo 1.1 vemos, por ejemplo, que autores como Clements plantean que es importante para los gobernantes tener presente los valores, las creencias, las tradiciones y las costumbres que existen dentro de la comunidad para favorecer la etapa inicial de las negociaciones de paz. Sobre este punto puede decirse que en la historia de Colombia el grado de legitimidad de los presidentes anteriores no ha tenido resultados significativos en el contexto de las negociaciones por la paz. Solo sobre la política del expresidente Álvaro Uribe se puede opinar que su estrategia de mano dura sí ha tenido resultado positivo. Después de tantos ataques contra las FARC y sus miembros, cuando el presidente Santos seguía con una parte de la política de Uribe y específicamente cuando el gobierno colombiano había matado a uno de los comandantes militar más altos de las FARC, ha resultado en la petición a las FARC para negociar por la paz. Gracias a eso empezaron de nuevo después de tantos años las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.

En segundo lugar, el concepto de la justicia durante las conversaciones de paz. Autores como Bendaña y Arnson discuten sobre este tema en el debate académico. Aquí se habla sobre la necesidad de que el concepto de justicia esté presente durante las conversaciones de paz. Lo que se ha buscado aclarar en esta investigación es que tanto el Gobierno colombiano como las FARC tienen que asegurar el derecho a la justicia, como se ha explicado en el parágrafo 1.2. Incluso si hay un acuerdo sobre los términos de un proceso de desmovilización de las FARC, la implementación por parte del Gobierno será un reto. Cualquier desmovilización con los miembros de un grupo armado debe equilibrar los incentivos para desarmar con la necesidad de justicia para las víctimas de los crímenes cometidos por el grupo. Los mecanismos de justicia de transición para poner fin al conflicto y los derechos de las víctimas son dos temas importantes en la agenda de los negociadores. Si han aclarado al alto al fuego, hay que mantener su palabra. Esto lo vemos en las preocupaciones de la guerrilla, que después de que llegaran a un tipo de acuerdo aún pudieran sus miembros ser juzgado con incluso la pena de muerte.

Y, en tercer lugar, el rol de los actores internacionales. Es importante tener presente la participación de la comunidad internacional para hacer posible el proceso de las negociaciones por la paz, como explican autores como Touval y Zartman en el parágrafo 1.3. En el tercer capítulo vemos que las conversaciones entre el Gobierno de Santos y las FARC han sido apoyadas por todos lados. Esto favorece el proceso de paz. Además de los actores internacionales, el apoyo popular a las conversaciones de paz y

al liderazgo es de igual importancia e incluso crucial para su éxito. Como se ha señalado en el segundo capítulo, el apoyo popular al expresidente Uribe era de un grado alto, lo que también ha favorecido el grado de legitimidad del presidente, dos conceptos que en este caso están muy relacionados. El apoyo popular ha sido elevado a pesar de la desconfianza generalizada de las FARC y el profundo escepticismo de las intenciones de sus líderes, solo que también existen fuentes donde dicen que una parte mucho más pequeña de la población es optimista de que un resultado exitoso es probable.

Debido al carácter único del caso colombiano sería útil explorar nuevas y diferentes alternativas, teniendo en cuenta los ejemplos internacionales, con resultados alentadores sobre los casos que también son mencionados anteriormente, como lo son Guatemala, Nicaragua y El Salvador. La paz siempre ha sido en otros países más barata que la guerra. En Colombia, el Gobierno y la guerrilla parecen estar de acuerdo en su afán por demostrar que el proceso de paz es muy estresante. Solo que por los intereses totalmente diferentes hacen casi imposible o quizás totalmente imposible llegar a un acuerdo de paz y con eso estar de acuerdo sobre la agenda que hay que firmar. Aún ya que hay muchas reacciones positivas sobre las negociaciones por la paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, muchos esperan que durante la presidencia de Santos esté sucediendo proceso cuyo resultado podía considerarse hasta hace algún tiempo atrás un milagro, resultado que es necesario por poner fin a la guerra civil de la guerrilla en Colombia a través las negociaciones de paz.

Bibliografía

ÁLVAREZ, A. M. (2010). *From Revolutionary War to Democratic Revolution. The Farabundo Martí National Liberation Front (FMLN), El Salvador*. Berlín: Berghof Conflict Research.

ARNAULT, J. (2006). *Good Agreement? Bad Agreement? An Implementation Perspective*. Princeton: Centre of International Studies, Princeton University.

ARNSON, C. J. (2001). *The peace processes in Colombia and U.S Policy*. University of Notre Dame, Helen Kellogg Institute for International Studies.

ARNSON, C. J. (1999). *Comparative peace processes in Latin America*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press; Stanford: Stanford University Press.

BARQUIN, R. M. (1975). *Las luchas guerrilleras en Cuba: de la Colonia a la Sierra Maestra*, pp. 328-330, Madrid: Playor.

BBC NEWS (2014). 'Colombia peace talks: Martin McGuinness meets President Santos', sitio: *de bbc news*, <http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-26846712>.

BEITTEL, J. S. (2014). 'Peace talks in Colombia', *Congressional Research Service Report*, sitio: <http://fas.org/sgp/crs/row/R42982.pdf>.

BENDAÑA, A. (1996). 'Conflict resolution empowerment and disempowerment', *Peace & Change a Journal of peace research*, Vol. 21, pp. 68-77.

BOUDON, L. (1996). 'Guerrillas and the State: The Role of the State in the Colombian Peace Process', *Journal of Latin American Studies*, 28, pp. 279-297.

BOYLE, F. A. (1996). 'Human Rights in Peace Negotiations', *Human Rights Quarterly*, Vol. 18, No 3, pp. 515-516.

CAISTOR, N. (2013). 'Colombia: Alvaro Uribe and the Peace Talks', *Latin American Bureau*, sitio: <http://lab.org.uk/alvaro-uribe-and-colombias-peace-talks>.

CEPEDA ULLOA, F. (2003). 'Álvaro Uribe: Dissident', *the Inter-American Dialogue*, Washington: Editorial, sitio: <http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/Cepeda-IAD-WorkingPaper-August03.pdf>.

CHERNICK, M. W. (1988). 'Negotiated settlement to armed conflict: Lessons from the Colombian peace process', *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 30, No 4, pp. 53-88.

FELBAB-BROWN, V. (2013). 'Crime-War Battlefields', *Survival: Global Politics and Strategy*, Vol. 55, No 3, pp. 147-166.

- FORERO, J. (2012). 'Comienzan las conversaciones de paz en Oslo con críticas', *El Economista*, sitio: <http://eleconomista.com.mx/internacional/2012/10/19/comienzan-las-conversaciones-paz-oslo-criticas>.
- GALINDO HERNÁNDEZ, C. (2006). 'Neopopulismo en Colombia: el caso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez', *Íconos: Revista de Ciencias Sociales*, No 27, pp. 147-162.
- GOLBERT, L. (2004). '¿Derecho a la inclusión o paz social? Plan jefas y Jefes de Hogar Desocupados', *División de Desarrollo Social*. Santiago de Chile: CEPAL.
- HOLIDAY, D. (2000). 'Guatemala's Precarious Peace'. *Current History*. Vol. 99, No 634, pp. 78-84.
- HOLMES, J. S., GUTIÉRREZ DE PIÑERES, A. S. y CURTIN K. M. (2007). 'A Subnational Study of Insurgency: FARC Violence in the 1990s', *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 30, No 3, pp. 249-265.
- HULTMAN L., KATHMAN J. y SHANNON, M. (2013). 'United Nations Peacekeeping and Civilian Protection in Civil War', *American Journal of Political Science*, Vol. 57, No 4, pp. 875-891.
- ISACSON, A. (2012). 'Hope for Peace in Colombia: Reasons for Optimism, Awareness of Obstacles', *Washington office on Latin America (WOLA)*, sitio: http://www.wola.org/commentary/hope_for_peace_in_colombia_reasons_for_optimism_awareness_of_obstacles.
- KEEN, B. y HAYNES, K. (2009). *A History of Latin America*. 8th edition, Boston: Houghton Mifflin Company.
- KTEILY, N. S., SAGUY, T., SIDANIUS, J. y TAYLOR, D. M. (2013). 'Negotiating Power: Agenda Ordering and the Willingness to Negotiate in Asymmetric Intergroup Conflicts', *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 105, No 6, pp. 978-995.
- LARSON, J. (1977). 'La guerrilla en América Latina ¿terrorismo o guerra popular?', *Revista de Sociología*, No 7, pp. 91-112.
- LEE, C. (2012). 'The FARC and the Colombian Left: Time for a Political Solution?', *Latin American Perspective*, Vol. 39, No 1, pp. 28-42.
- LEGUIZAMO, C. (2002). 'Reflexiones sobre el proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana y las FARC- EP (1998-2002)', *Archivos de Economía*, Departamento Nacional de Planeación, Dirección de estudios económicos, documento 204, pp. 1-26.
- DE ONIS, J. (2014). 'Colombia's voters uneasy with FARC peace talks', *World Affairs Journal*, sitio: <http://www.worldaffairsjournal.org/blog/juan-de-onis/colombias-voters-uneasy-farc-peace-talks>.
- PALACIOS, M. (2006). *Between legitimacy and violence: a history of Colombia, 1875-2002*. Capítulo 5 (pp. 170-267). Durham: Duke University Press.

- PARDO, P. (2000). 'Colombia's Two-Front War', *Foreign Affairs*, Vol. 79, No 4, pp. 64-73.
- PARSONS, T. (1957). 'The distribution of power in American Society', *World Politics*, Vol. 10, No 1, pp. 123-143.
- PEARCE, J. (1999). 'Peace-building in the Periphery: Lessons from Central America', *Third World Quarterly*, Vol. 20, No 1, pp. 51-68.
- PETRAS, J. (2000). 'The FARC faces the empire', *Latin American Perspectives*, Vol. 27, No 5, pp. 134-143.
- PIZARRO, E. (1992). 'Revolutionary guerrilla groups in Colombia', *Charles Bergquist, Ricardo Penaranda y Gonzalo Sánchez (eds.), Violence in Colombia: The contemporary crisis in historical perspective* (pp. 169-193) Wilmington, DE: SR Books.
- RAMSBOTHAM, A. y WENNMANN, A. (2014). 'Legitimacy and Peace Processes: From Coercion to Consent', *Conciliation Resources*, Vol. 2, No 25, pp. 12-31.
- RICHANI, N. (2013). 'The Peace Process in Colombia and U.S. Foreign Policy: Plan Colombia II', *North American Congress in Latin America*, NACLA, Washington, sitio: <https://nacla.org/blog/2013/6/3/peace-process-colombia-and-us-foreign-policy-plan-colombia-ii>.
- ROCHLIN, J. F. (2003). *Vanguard Revolutionaries in Latin America*. Boulder: Lynne Rienner.
- SANTOS, E. (2013). 'Presente y futuro del proceso de paz', *Fundación Ideas para la Paz*, Vol. 1, No 55, pp. 19-36.
- TICKNER, A.B. y PARDO, R. (2003). 'Estados Unidos, Colombia y sus vecinos: los desafíos externos de la "seguridad democrática"', *Foreign Affairs en Español*, Vol. 3, No 4, pp. 102-114.
- TOKATLIAN, J. G. (1999). 'Colombia en guerra: las diplomacias por la paz', *Desarrollo Económico*, Vol. 39, No 155, pp. 339-360.
- TOUVAL, S. y ZARTMAN, W. I. (eds.) (1985). *International Mediation in Theory and Practice*. Boulder, CO: Westview Press.
- WICKHAM-CROWLEY, T. P. (1995). 'Auge y declive de los gobiernos de guerrilla en América Latina', *América Latina Hoy*, Vol. 10, No 10, pp. 7-20.
- WICKHAM-CROWLEY, T. P. (1990). 'Terror and Guerrilla Warfare in Latin America (1956-1970)', *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 32, No 2, pp. 201-237.